



**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA  
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES**

**RESOLUCIÓN NÚMERO 120120 DE 2025**

(15 de octubre 2025)

*"Por medio de la cual se revoca la a Resolución No. 62767 del 18 de junio del 2025"*

**LA DIRECTORA DE OTRAS PRESTACIONES DE LA ADMINISTRADORA DE LOS  
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD –  
ADRES**

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos, 114 del Decreto Ley 019 de 2012 modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, en desarrollo el párrafo del artículo 2.6.1.4.3.14 del Decreto 780 de 2016, numeral 1º y 5º del artículo 17 del Decreto 1429 de 2016 y el numeral 2º del artículo 6º de la Resolución 1012 de 2022 y

**1. ANTECEDENTES**

- 1.1 Que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES, mediante la **Resolución No. 62767 del 18 de junio del 2025**, ordenó el cobro a la señora **YESENIA MARIA SANJUAN CASTILLO**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 22655470, por valor de **TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.(\$366.739,92); valor indexado al mes de MAYO de 2025**, más los intereses causados a partir de la ejecutoria de dicho acto administrativo y hasta la fecha de su cancelación, por concepto de gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnización reconocidos y pagados por el entonces Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA hoy ADRES, originados por accidente de tránsito ocurrido el día **03/05/2022** en el cual se vio involucrado el vehículo de placa **SWR39C** de propiedad del obligado, automotor que para la fecha de los hechos, no contaba con una póliza de seguro obligatorio SOAT.
- 1.2 En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos **67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)**, y conforme a los artículos **23 y 24 de la Ley 527 de 1999** sobre validez y eficacia de los mensajes de datos, se deja constancia de que la citación para notificación personal de la **Resolución No. 62767 del 18 de junio de 2025** fue remitida el **22 de agosto de 2025** al correo electrónico registrado por el interesado, generándose trazabilidad técnica que acredita su envío y recepción efectiva: **mensaje con estampilla de tiempo a las 13:54:25, acuse de recibo a las 13:54:26, apertura de la notificación a las 16:18:54 y lectura del mensaje a las 16:19:06**. En consecuencia, y de conformidad con el artículo 68 ibídem, **se solicita al destinatario comparecer personalmente o por intermedio de apoderado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación**, en la **Avenida Calle 26 No. 69–76, Torre 1, Piso 16, Centro Empresarial Elemento, Bogotá D.C.**, con el fin de notificarse personalmente del contenido de la citada resolución. Transcurrido dicho término sin que se efectúe la comparecencia, la ADRES procederá a realizar la **notificación por aviso**, en cumplimiento del artículo 69 del CPACA, entendiéndose surtida la notificación conforme a las normas sobre mensajes de datos y garantizándose el **debido proceso, publicidad y eficacia administrativa**.
- 1.3 En cumplimiento del artículo 69 del CPACA (Ley 1437 de 2011) y en concordancia con los artículos 23 y 24 de la Ley 527 de 1999, se deja constancia de que, habiéndose remitido la **citación para notificación personal** de la Resolución No. **62767 del 18 de junio de 2025** al correo **yeseniasanjuan70@gmail.com** el **22 de agosto de 2025** (Acta de Envío y Entrega de Correo Electrónico Id **820385** – 4-72) sin que se produjera comparecencia dentro de los **cinco (5) días hábiles** siguientes, la ADRES procedió a **NOTIFICAR POR AVISO** la citada decisión **por medios electrónicos el 02 de octubre de 2025**, quedando la trazabilidad técnica así: **mensaje enviado con estampilla de tiempo a las 23:52:29, acuse de recibo a las 23:52:29 y apertura del aviso por el destinatario el 03/10/2025**

*"Por medio de la cual se revoca la Resolución No. 57233 del 18 de abril del 2024"*

**a las 09:29:48**; con lo anterior, la notificación por aviso **se entiende válidamente surtida** y los términos legales comienzan a correr **a partir del día hábil siguiente a su práctica**, garantizándose los principios de publicidad, eficacia y debido proceso.

1.4 Que, mediante **radicado No. 2025-10082**, el señor presentó **tutela**, en el cual manifiesta que **no posee ninguna deuda** con la **Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)**.

1.5 Que con fundamento en los documentos que obran en el expediente, esta Dirección procederá a **Resolución No. 62767 del 18 de junio del 2025**, teniendo en cuenta que con su expedición se está afectando injustificadamente a una persona.

## **2. PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA**

Que ésta revocatoria se dispone de conformidad con lo preceptuado por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cuanto expresa que: *"Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:*

- 1. *Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.*
- 2. *Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
- 3. **"Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona"**.  
(Negrilla fuera de texto)

La revocatoria es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Así mismo, en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento; adicionalmente es una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, de oficio, constate la ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa agravio injustificado a una persona.

Sobre el particular, la Corte Constitucional mediante sentencia C-742 de 1999, M.P. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, precisa sobre la revocatoria directa lo siguiente:

*"(...) La revocación directa tiene como propósito el de dar a la autoridad la oportunidad de corregir lo actuado por ella misma, inclusive de oficio, ya no con fundamento en consideraciones relativas al interés particular del recurrente sino por una causa de interés general que consiste en la recuperación del imperio de la legalidad o en la reparación de un daño público. La persona afectada sí puede en principio pedir a la Administración que revoque su acto, o la autoridad puede obrar de oficio. Cosa distinta es que el interesado, a pesar de haber hecho uso de los recursos existentes, pretenda acudir a la vía de la revocación directa, a manera de recurso adicional, lo cual puede prohibir el legislador, como lo hace la norma acusada, por razones de celeridad y eficacia de la actividad administrativa (art. 209 C.P.) y además para que, si ya fue agotada la vía gubernativa, el administrado acuda a la jurisdicción.*

*... La revocación directa es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Y es una prerrogativa en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha sido demandado ante lo contencioso administrativo; pero, también es una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, motu proprio, constatare la*

"Por medio de la cual se revoca la Resolución No. 57233 del 18 de abril del 2024"

*ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa agravio injustificado a una persona. (...)"*

En el mismo sentido el Honorable Consejo de Estado en Sentencia con radicación número 25000-23-000-1998-3963-01 (5618-02), Consejero Ponente Alberto Arango Mantilla, consideró lo siguiente en cuanto a la revocatoria de los actos administrativos:

*"Como se sabe, la revocación directa del acto administrativo es una potestad legal otorgada a una autoridad para hacer desaparecer de la vida jurídica las decisiones que ella misma ha expedido, **bien sea por razones de legalidad** o por motivos de mérito (causales). **Son razones de legalidad cuando constituye un juicio estrictamente lógico jurídico, esto es, cuando se hace una confrontación normativa, porque infringe el orden preestablecido que constituye el principio de legalidad (num. 1º del art. 69 del C.C.A.).** Y de mérito, cuando el acto es extinguido por razones de oportunidad, conveniencia pública, o cuando una persona determinada recibe un agravio injustificado (num. 2º y 3º ibidem)".* (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Así mismo, la **sentencia 2013-00577 de 2020 proferida por el Honorable Consejo de Estado** dispuso lo siguiente:

**"De la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto**

*En relación con los actos administrativos conviene recordar que se constituyen en la expresión unilateral de la voluntad de la Administración, dirigida a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas generales de carácter abstracto e impersonal y de carácter particular y concreto respecto de una o varias personas determinadas o determinables.*

*Tanto los actos administrativos generales y abstractos como los particulares y concretos, pueden ser sustraídos del mundo jurídico por cuenta de las mismas autoridades administrativas que los profirieron, bien sea de oficio o a solicitud de parte, cuando como expresamente lo ordena el Artículo 69 del CCA: sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o la ley; no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él; o si con ellos se causa agravio injustificado a una persona.*

*Específicamente en cuanto a los actos de contenido particular y concreto, se debe precisar que la Administración puede revocarlos, bien sea de manera directa o demandando su propio acto a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, siempre y cuando se configuren las causales anteriormente descritas de que trata el Artículo [69](#)".*

En relación con el debido proceso, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-980 de 2010, ha señalado que el mismo no solo aplica al procedimiento judicial sino también a todas las actuaciones administrativas, y con ello a todo el actuar de la administración pública:

*"... la Constitución extiende la garantía del debido proceso no solo a los juicios y procedimientos judiciales, sino también a todas las actuaciones administrativas. Ello significa, que el debido proceso se mueve también "dentro del contexto de **garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública**, en la realización de sus objetivos y fines estatales, es decir, cubija a todas sus manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por*

*"Por medio de la cual se revoca la Resolución No. 57233 del 18 de abril del 2024"*

*motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses". (Negrilla y subrayado fuera de texto).*

El Consejo de Estado- Sala de lo Contenciosa Administrativa- Sección Cuarta de 25 de octubre de 2017 se pronunció sobre las modalidades de revocatoria directa en la Sentencia 73001-23-31-000-2008-00237-01 señalando lo siguiente:

*"(...) No obstante, del examen de la normativa positiva que la regula (artículos 69 a 74 del Código Contencioso Administrativo) se puede concluir que tiene dos modalidades: de un lado, como mecanismo de utilización directa por parte del sujeto pasivo del acto frente a la autoridad que lo produjo o ante su inmediato superior y, de otro, como medida unilateral de la Administración para dejar sin efecto decisiones adoptadas por ella misma. En el segundo caso, es un mecanismo ya no alternativo sino adicional al de la vía gubernativa, del que puede hacer uso la Administración de manera oficiosa, bajo ciertas circunstancias y limitaciones, para revisar y corregir la manifiesta antijuridicidad, inconveniencia, o el agravio injustificado que cause alguno de sus actos administrativos. Es, en efecto, un mecanismo unilateral de la administración otorgado por el legislador, con el fin de revisar sus propias actuaciones y, dentro del contexto de la actuación oficiosa, sacar del tránsito jurídico decisiones por ella misma adoptadas". Mediante esta figura, la Administración, de oficio o a solicitud de parte, deja sin efecto los actos administrativos expedidos por ella misma, por las causales y conforme con el trámite consagrado en la ley. (Negrilla y subrayado fuera de texto).*

### 3. CONSIDERACIONES DE ESTA DIRECCIÓN

Tal como se manifestó en la **Resolución No. 62767 del 18 de junio del 2025**, la obligación que ordena el cobro, tiene fundamento en el artículo 114 del Decreto Ley 019 de 2012, el cual facultó a esta Entidad para ordenar mediante acto administrativo, el cobro de los créditos a favor del Estado correspondientes a las reclamaciones reconocidas y pagadas por el entonces Fondo de Solidaridad y Garantía- FOSYGA, con ocasión de los daños corporales y/o indemnización por muerte y gastos funerarios, causados en Accidentes de Tránsito, como consecuencia del incumplimiento de la obligación de contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT vigente. Que según lo establecido en el artículo 192 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) y en concordancia con el artículo 42 de la Ley 769 de 2002, todo vehículo que transite en el territorio colombiano debe estar amparado por un seguro obligatorio de accidentes de tránsito- SOAT.

De acuerdo a lo anterior, y de conformidad con las normas que regulan el proceso de cobro que nos ocupa, se tiene que quien figure ante el Estado como propietario de un vehículo, es la persona responsable de cumplir con las obligaciones que se deriven de tal derecho, por consiguiente, el propietario inscrito de un automotor carente de SOAT que resulte involucrado en un accidente de tránsito, le corresponde asumir la responsabilidad frente a los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, que reciban los afectados en calidad de beneficiarios o víctima de tales siniestros, los cuales en su debido tiempo fueron asumidos por el Estado a través del entonces FOSYGA hoy ADRES, siendo por lo tanto procedente el proceso de repetición.

**Que**, mediante Resolución No. 62767 del 18 de junio de 2025, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, adelantó el proceso de determinación de deudor por concepto de los gastos médicos, quirúrgicos y hospitalarios derivados del accidente de tránsito ocurrido el **3 de mayo de 2022**, en el cual se vio involucrado un vehículo identificado inicialmente con la placa **SWR39C**.

"Por medio de la cual se revoca la Resolución No. 57233 del 18 de abril del 2024"

**Que**, dentro de la etapa de revisión y verificación de información técnica efectuada por esta Dirección, se constató, a partir de la consulta en el **Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT**, que el vehículo relacionado con el siniestro corresponde en realidad a la **motocicleta marca HONDA, de placas SWC39C**, número de licencia de tránsito **10003639351**, tipo de servicio **particular**, actualmente en estado **activo**, matriculada en el municipio de **Valledupar (Cesar)**.

**Que**, de acuerdo con los registros oficiales del RUNT, la motocicleta de placas **SWC39C** figura a nombre del señor **LUIS DE CASTRO PADILLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **72000898**, residente en la ciudad de Valledupar (Cesar).

**Que**, verificada esta información, se observa que la señora **YESENIA MARÍA SANJUAN CASTILLO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **22.655.470**, **no ostenta la calidad de propietaria del vehículo involucrado en el accidente de tránsito**, razón por la cual no le es atribuible la obligación objeto de cobro.

**Que**, en consecuencia, y con el propósito de garantizar la legalidad, la correcta identificación del responsable y el respeto del debido proceso, esta Dirección considera procedente **ajustar el registro administrativo del caso** conforme a la información oficial suministrada por el RUNT, en armonía con los principios de eficacia, transparencia y justicia material previstos en los artículos 3 y 209 de la Constitución Política y en la Ley 1437 de 2011.

En virtud de lo anteriormente expuesto este Despacho:

RESUELVE

**ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución No. 62767 del 18 de junio del 2025**, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar** a la señora **YESENIA MARIA SANJUAN CASTILLO**, identificada con cédula de ciudadanía número **22655470**, el contenido de la presente resolución, en los términos de los artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Destinatario	Dirección física y/o electrónica
YESENIA MARIA SANJUAN CASTILLO	yeseniasanjuan70@gmail.com

**ARTÍCULO TERCERO: Comunicar** la presente decisión a la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud y a la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la ADRES, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

**ARTÍCULO CUARTO: Comunicar** la presente decisión a la Oficina Asesora Jurídica, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias, frente a las resoluciones que libraron el mandamiento de pago.



## RESOLUCIÓN NÚMERO 120120 DE 2025

HOJA No. 6 de 6

*"Por medio de la cual se revoca la Resolución No. 57233 del 18 de abril del 2024"*

**ARTÍCULO QUINTO: Indicar** que contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C., a los (15) días del mes de octubre de 2025.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



Firmado Digitalmente por  
**YASMÍN ESCAMILLA B.**  
Directora de Otras Prestaciones

Revisó: Rafael Enrique Roa Pinzón - Abogado Contratista  
Elaboró: Simón Hinestroza - Abogado Contratista  
Expediente: YESENIA MARIA SANJUAN CASTILLO C.C.: 22655470